

D.3/ D
4.310
Ej. 2



**Alternativas de la
globalización desde
la perspectiva
del trabajo**

 **ens**
ESCUELA NACIONAL SINDICAL

D.3 /D
4310
Ej. 2

**Alternativas de la
globalización desde
la perspectiva
del trabajo**



Diciembre 2002

Alternativas de la globalización desde la perspectiva del trabajo

Compilación de Juan Carlos Celis



Calle 51 N° 55-78

Tel: 513 31 00 Fax: 512 23 30

Correos Electrónicos: enscomu@epm.net.co
esindica@epm.net.co

A.A. 12175 Medellín-Colombia

Diciembre 2002

Contenido

Presentación	5
La preocupación por el otro es hoy la idea más profunda y revolucionaria	
Entrevista a Noam Chomsky por Ronaldo Mota	7
Inventar un proteccionismo altruista	
Bernard Cassen	13
Una revolución tranquila del trabajo	
Chanal Euzeby	29
Empleo: ¿Pensar a corto o largo plazo?	
Bernard Cassen	41

Presentación

Las preocupaciones actuales frente a los cambios vertiginosos, cambios sociales que se están dando en el mundo a través de la incidencia tecnológica y económica son situaciones analizadas en estas traducciones por cuatro pensadores de talla internacional que han puesto en jaque la incidencia de la globalización en el mundo.

El trabajo, la economía, el pleno empleo, el ambiente, las consecuencias y posibles soluciones para las nuevas relaciones en un mundo de tecnologías que avanzan en la sociedad contemporánea, son los tópicos analizados en la entrevista realizada al lingüista Noam Chomsky por el físico Ronaldo Mota, profesor de Física de la Universidad Federal de Santa María; por Chantal Euzeby por con el texto “Una revolución tranquila en el trabajo”; por René Passet en “Empleo: ¿Pensar a corto o largo plazo?” y por último Bernard Cassen en “Inventar un proteccionismo altruista”.

La preocupación por el otro es hoy la idea más profunda y revolucionaria

Avram Noam Chomsky es el más destacado lingüista vivo y el principal responsable por llevar la ciencia de los lenguajes a la categoría de ciencia teórica efectiva. A los 72 años, natural de Filadelfia, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), desde 1955, es uno de los más importantes activistas políticos del mundo contemporáneo. Crítico social, se dio a conocer por su contundencia y consistencia crítica a las políticas americanas internas y, especialmente, externas. Chomsky ha escrito diversos libros sobre temas actuales.

Fue entrevistado por el físico Ronaldo Mota, profesor titular del Departamento de Física de la Universidad Federal de Santa María, durante el encuentro de la Sociedad de Ciencias de los Materiales, en Bostón. Más allá de hablar del significado del *Foro Social Mundial*, el lingüista fue interrogado sobre el papel de las universidades, las cuestiones ambientales, las elecciones americanas y sobre la vida. *Porto & Vírgula* transcribe de forma íntegra la entrevista realizada el 1º de diciembre del 2000 en el gabinete del profesor Noam Chomski.

Ronaldo Mota-. El *Foro Social Mundial*, a realizarse en enero del 2001, en Porto Alegre, será una nueva oportunidad para la creación e intercambio de proyectos sociales y económicos que apuntan a la promoción de los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo sostenible. ¿Qué espera el profesor Chomsky de ese evento?

Noam Chomsky-. Naturalmente éste no es el primer esfuerzo en esa dirección. Algunos países en 1977 se comprometieron en la creación de un programa para un nuevo orden económico. A partir de él pretendían dedicarle más atención a las necesidades de la mayoría de la población. No se consiguió llevar adelante el programa propuesto. Un nuevo orden internacional estaba en curso y se basaba en la organización llamada neoliberal, mucho más poderosa, y en la que de alguna forma el resto del mundo quedaba exento de participar.

Esto volvió a ocurrir este año, hace algunos meses. En abril, ciento dos países, representando a la mayoría de la población del planeta, recuperaron aquella idea de 1977 y tuvieron un encuentro de alto nivel en La Habana, con una etapa preparatoria en Colombia. Fue el más importante evento hasta entonces. Hubo propuestas muy concretas, buenas sugerencias sobre un posible nuevo orden. El encuentro estaba dirigido por países del tercer mundo y, hasta donde estoy informado, aquello fue lo único destacable de aquel evento en los Estados Unidos. El *New York Times* sólo publicó tres frases, es ridículo: estaban allí representantes del ochenta por ciento del planeta, incluidos los conservadores, pero la prensa internacional no le concedió ninguna atención. De hecho, fue la única voz en el mundo. Ningún otro intelectual responsable hizo manifestaciones acerca de eso, o entendió si-

quiera la importancia de aquel evento. Podemos verificar nuestra base de datos sobre eso. No hay nada.

El *Foro Social Mundial* es diferente y eso puede ser relevante. El movimiento internacional debe hacer que sea mucho más significativo. El tercer mundo ha hecho propuestas contra organizaciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial durante años y años. Y comienza a surtir efectos. También los *sin tierra* en el Brasil. Los indígenas y hacendados en México vienen protestando en todas partes sobre las consecuencias de los ajustes estructurales propuestos por esas organizaciones a través de políticas económicas. También para los bancos ha sido imposible ignorar esas manifestaciones.

También se han dado reacciones y algunos cambios en esas políticas. Cuando esas manifestaciones alcanzan a Occidente, como en Sea-

ttle, no alcanzan a ser ignoradas completamente. La principal resistencia no ha estado sólo en los Estados Unidos, pero cuando algo acontece aquí ellos sólo manifiestan desprecio.

Las demostraciones en Washington, por ejemplo, ocurrieron un poco después de abril. Coincidieron con la declaración de la Ley Marcial en Bolivia; mientras se hacía una protesta contra la privatización del servicio de abastecimiento de aguas, de acuerdo con las exigencias del Banco Mundial. Algunos meses antes de aquellos eventos, grandes conglomerados internacionales habían participado de aquella privatización y podían ahora definir precios más libremente. Sin embargo, ocurre que la mayor parte de la población no disfruta siquiera del sistema público de abastecimiento de agua, existente anteriormente. Al coincidir las manifestaciones en Bolivia con la demostración de

Washington, todas las miradas estaban volcadas sobre la capital americana. El pueblo de Bolivia hizo uso inteligente de la red mundial de computadoras, aprovechando bien la manifestación de Washington para divulgar su situación, y eso hizo la diferencia. El gobierno de Bolivia tuvo que hecharse para atrás.

Una dictadura no puede desestimar una confusión en el país. Hitler, por ejemplo, tenía un programa asistencial muy fuerte y eficiente orientado a mantener a la población alemana parada. Aún la más fuerte dictadura tiene que responder a las presiones. La dictadura que administra el mundo no es diferente.

De cualquier manera, el *Foro Social Mundial* es parte un movimiento a gran escala que puede discutir esas cuestiones.

Ronaldo Mota.- Profesor ¿Qué tipo de estrategias internacionales pueden ser creadas para un desarro-

llo sostenible orientado a la erradicación de la pobreza y del hambre y, simultáneamente, proteger el medio ambiente?

Noam Chomsky.- En primer lugar, el desarrollo sostenible tiene que ser asumido objetivamente.

No pueden ser solamente estrategias. En este momento, la cuestión ambiental no es tratada de forma objetiva. Por ejemplo, se considera que este asunto sólo es tratado por algunos “fanáticos”, entonces la cuestión del calentamiento global no es considerado como un hecho. Sin embargo, las devastaciones pueden alcanzar tanto al Sur como al Norte, a Europa y al Círculo Ártico. En perspectiva, puede traer problemas hasta para la sobrevivencia de algunas especies. Pero estas cosas tan simples no aparecen en el sistema de mercado. Las estructuras existentes parecen incapaces de tratar adecuadamente ese asunto.

El mercado no está preocupado

por la destrucción del medio ambiente.

En el sistema de mercado, todo individuo pretende maximizar su ganancia personal. Con esa visión de la producción y del consumo, se supone que no hay preocupación por el asunto. Entre tanto, hay cosas que el mercado no puede responder porque no hay voces en él para ello. Por ejemplo, las futuras generaciones, no tienen voz en la lógica del mercado. Por los más elementales principios, sus intereses son eliminados. Dados los límites con que el mercado funciona, marginalizando o eliminando las preocupaciones, el proyecto del desarrollo sustentable es un imposible.

Una cosa sí es clara. Los ricos y poderosos nunca aceptarán para sí mismos las reglas del mercado de forma completa. Esas reglas son hechas para los otros. Volvemos al siglo XIX. En 1860, Inglaterra obligó a China a aceptar sus productos ma-

nufacturados, muy a pesar de que el proceso tecnológico de manufactura chino fuese en la época, en muchos aspectos, más avanzado que el de Inglaterra. Era cuestión de eliminar competidores. En la India también. En suma, la historia económica se modelaría de la manera como las cosas fueron hechas.

Pero recientemente, los Estados Unidos tuvieron un poderoso desarrollo de forma intervencionista, además. Los militares americanos fueron más dinámicos de lo que lo fuera la propia economía americana. Así, el tercer mundo se fue relegando al océano del liberalismo. Los países que se desarrollaron tuvieron que infligir reglas, no fue ciertamente siguiendo las reglas de los otros. Las reglas del mercado, aplicadas rigurosamente, no pueden coexistir con el desarrollo sustentable.

El desarrollo sustentable exige planificación social, la preocupación por el futuro, el tomar en cuen-

ta al otro... Lo que existe hoy es un enorme esfuerzo para no permitir eso. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos hoy. Hay un gran ataque al sistema de previsión. ¿Por qué tal ataque? La cosa es totalmente prevista. Cualquier economista puede demostrar eso en cinco minu-

tos. El ataque es porque la seguridad social esta basada en principios éticos. Tales principios precisan ser destruidos. Nadie deberá preocuparse por el otro. La preocupación por el otro es la más profunda y revolucionaria de las ideas. Según ellos, eso debe ser eliminado.

Inventar un proteccionismo altruista

La introducción de cláusulas sociales y ambientales en el comercio internacional puede ser una alternativa para evitar que los países del Sur continúen sometidos a las transnacionales.

*Bernard Cassen**

En Seattle, en noviembre de 1999, los manifestantes le dieron un gran puntapié al libre comercio. Se teme, entre los editorialistas que exponen el punto de vista de la “comunidad” financiera, que, si después del gran fracaso en Seattle, la máquina de liberalizar se puso a andar, en cámara lenta, ella se oxidará y no podrá nunca más dignificarse.

Es un escenario catastrófico.

En lo que concierne a las cambios de bienes y servicios, las negociaciones comerciales no se limitan a la superficie de las cosas. Ellas tienen otra función, mucho más importante: desarticular el orden interior de los Estados para moverlo en un orden “globalizado”¹ destructor de solidaridades y colectivos, para conservar sólo a los actores planetarios en los flujos financieros y a quienes los controlan: bancos, com-

* Director de Le Monde Diplomatique.

1. Ignacio Ramonet, “Régimes globalitaires”, Le Monde Diplomatique, junio 1997.

pañías de seguros, empresas multinacionales, fondos especulativos y fondos de pensiones, tal como individuos del tipo Bill Gates. Por lo tanto, ellos no desalentarán ni dejarán que se toque al libre comercio, que debe continuar en el santuario inviolable de las “libertades” del capital.² Contrariamente a los ingenuos o ignorantes de la historia, que creen aún en la ficción del “dulce comercio”, del cual hablaba Voltaire, ellos tienen buena memoria y saben que la actividad mercantil se inscribe en una implacable relación de fuerzas, en su esencia, difícil para los débiles.

Las cañoneras de la OMC

Así las cosas ¿cuál es la diferencia en la naturaleza existente entre la voluntad actual de abrir los merca-

dos del Sur —aún parcialmente cerrados, por ejemplo, para la expansión de los “servicios financieros” a los bancos y compañías de seguros del Norte—, y la guerra del opio, con la victoria de los ingleses contra los chinos en los años 40 del siglo pasado? Ninguna. O al menos los medios empleados. En aquella época, las fragatas británicas tuvieron que bombardear Cantón y ocupar Hong Kong para obligar a China —por el Tratado de Nankin—, a abrir sus fronteras al comercio europeo y, en particular, al del opio. Hoy es la OMCE la que ejerce el papel de cañón.

La gran contribución de la movilización de Settle fue poner al frente de la escena pública, la cuestión del comercio y de la libre circulación de mercancías; no sólo como simples factores de las relaciones

2. Bernard Cassen, “Libré-échange, la dernière Bastille”, *Le Monde Diplomatique*, junio de 1999.

entre los Estados, sino como verdaderas tenazas para aplastar lo que aún resiste en las legislaciones nacionales y obligar al conjunto de las sociedades a subordinarse al orden mundial único de las finanzas, pensado y ejecutado por lo que se definió, como el “Politburo de la Internacional Liberal”: FMI, Banco Mundial, G-7, OCDE, OMC, con su sección “regional” que es la Comisión Europea³.

Gracias a la intuición y a la experiencia de las casi 1.300 organizaciones del mundo entero que habían pedido una auditoría en la OMC y una evaluación de los cinco años de liberalización desde 1995, se consiguió penetrar el código —no secreto, pero nunca suficientemente explícito— del programa ultraliberal. Tanto de un lado como del otro se saben las bases en que se encuentra el estatuto real del comercio.

Subsiste, entre tanto, un discurso combinado que media y que los políticos modelan para la mayoría de la opinión pública, para mostrar que cualquier aumento de intercambios parece bueno.

El episodio de la carne con hormonas debería haber despertado a los más letárgicos, pues muestra descarnadamente el derecho de intromisión y de injerencia de que dispone la OMC en los espacios en que, en principio, nada tiene que ver. La OMC pone así al servicio de la desregulación al sector de la salud pública, y, como en otros campos, impone el libre comercio colocando en tela de juicio las legislaciones sociales y las ambientales. El comercio se transforma en una herramienta para desmontar reglamentaciones, y abrirle vías rápidas a la libre circulación de capitales y a la libertad de inversión tales como el

3 “*L’éminence grise du château*”, Le Monde Diplomatique, noviembre 1998.

Acuerdo Multilateral de Inversionistas (AMI).

La reflexión de Keynes

Este era el sentimiento común entre “los de Seattle”, que representaban a un número cada vez mayor de ciudadanos con ojo crítico. Si estaban de acuerdo sobre el diagnóstico y sobre el objetivo —la OMC— sin embargo, no tenían aún una posición común sobre las soluciones alternativas a las tesis del libre comercio. Entonces, no resisten el examen teórico en la prueba de los resultados.⁴ Seattle fue la oportunidad para un laboratorio de reflexiones y de acuerdos internacionales, particularmente en sus implicaciones Norte/Sur, sobre las que se

pueden explorar algunas primeras pistas. Haremos esto a partir de esta reflexión de Keynes, ya citada de varias maneras: “Tengo simpatía por los que quieren minimizar y no maximizar el relacionamiento económico entre las naciones. Las ideas, el conocimiento, el arte, la hospitalidad, los viajes, son todas las cosas que, por su naturaleza, son internacionales. Pero sé bien que las mercancías son de fabricación nacional siempre que sea posible y cómodo”.⁵

El gran economista formula aquí una idea que de tan evidente que acaba siendo olvidada: las únicas relaciones que cuentan entre los pueblos son las que se dan, de un país a otro, entre los ciudadanos, su lengua, sus creencias, sus productos

4. Bernard Cassen, “*Fallacieuse théorie du libre-échange*”, Le Monde Diplomatique, noviembre 1999.

5. Citado por Herman E. Daly, “*The perils of free trade*”, Scientific American, noviembre 1993 y retomado en el artículo “*Fallacieuse théorie du libre-échange*”, ya citado.

espirituales, manuales, corporales, y lo específico de su producción material. Estas relaciones se encarnan prioritariamente en las personas y en las obras, y no en mercancías y en servicios. Porque ¿acaso la fabricación de chips electrónicos de los obreros chinos en las firmas americanas o europeas de la zona económica especial de Shenzhen, contribuye, en algo, a que sea mejor conocida la China por los usuarios de aparatos de televisión o de celulares del resto del mundo? ¿Y qué imagen de Occidente pueden tener estos trabajadores a partir de lo que perciben, a través del comportamiento de algunos expatriados, por medio de los celosos funcionarios investidos de poder local, ritmos de trabajo y salarios de miseria, cuya única finalidad es la “creación de valor” para los accionistas de la empresa?

El único proteccionismo aceptado en su nombre es el de la negativa, proclamada o implícita, a la cir-

culación de personas, obras e ideas. En relación a esto —exceptuando a Corea del Norte—, el país sin duda más proteccionista, son los Estados Unidos, que sólo importa el 2% de su consumo audiovisual, traduce a cuenta gotas los libros extranjeros, cuyas publicaciones y bases de datos científicos que sólo marginalmente tengan en cuenta los trabajos de los investigadores del resto del mundo, y que con algunas prestigiosas excepciones, ignoran soberbiamente —a no ser en caso de grave crisis— lo que pasa en Europa, en Asia y sobretudo en África. Entre tanto, los jefes de Hollywood y sus portavoces en Washington —coadyudados, es preciso reconocer, por ciertas “élites” del viejo continente, principalmente franceses— se descabellan en la OMC contra la idea de “excepción” y de “soberanía” cultural, de cuotas de difusión de obras europeas, etc.

Para satisfacerlos plenamente

sería necesario que el 100% de los filmes proyectados en los grandes y pequeños cines, así como el 100% de la música oída en Europa viniesen del otro lado del Atlántico. Es, además lo que ya acontece en algunos países de la Europa del Este. Hay efectivamente en este caso un “atraso francés” a superar, pues las películas americanas, conforme a las fechas de filmación, representan del 40% al 60% de las rentas de los cines. Resultado: la única cultura popular verdadera común a los europeos es extra-europea. Esto vuelve a colocar en sus justas proporciones la alegada ambición de los diferentes tratados fundadores de la Unión Europea —desde Roma a Amsterdam— de fijar como objetivo, en sus preámbulos, una unión incesantemente más estrecha entre los pueblos de Europa. El núcleo de esos tratados exalta la concurrencia del libre comercio, o sea, la disolución en el espacio mundial.

En lo que concierne a las mercancías de fabricación nacional, mencionadas por Keynes cuando la globalización liberal ni siquiera se concebía, es una reivindicación de actualidad, con la condición de adaptarla al final del milenio, quiere decir, teniendo en cuenta la extensión geográfica de los cuadros potenciales de relación económica. Esta regulación, antes posible en el perímetro nacional, pudo haber sido ejercida hacia mucho tiempo en el marco de la Unión Europea, si hubiese tenido voluntad. Orientada, por tratados cada vez más liberales, hace exactamente lo contrario: la noción de preferencia comunitaria y de grandes políticas comunes ya no es una moda y lo que aún subsiste sobre Política Agrícola Común está en vías de desmantelamiento.

Ventajas de la producción local

Así mismo, si la Unión Europea

fuese reorientada en un sentido voluntarista —se trata apenas de una eventualidad— podría servir de referencia a otros conjuntos regionales constituidos o en vías de constituirse, teniendo como punto de vista la creación de zonas de libre comercio, lo mismo que las uniones aduaneras, pero que podrían también ser dotadas de ciertas atribuciones políticas. Sería el caso del Mercosur, en América del Sur; zonas agrupadas, por continentes, los países de África, del Caribe y del Pacífico ligados a la Unión Europea por las convenciones de Lomé; y la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA). Por otro lado no se puede alimentar mucho el optimismo en relación al acuerdo de libre comercio norteamericano (Nafta), pues es discutible que Washington acepte dividir atribuciones políticas con Ottawa y Ciudad de México.

Reaproximar, tanto como sea posible, los lugares de producción a

los lugares de consumo —sean ellos nacionales, lo que es evidente para los gigantes demográficos como la India y la China, o regionales, en el sentido plurinacional del término—, corresponde a una triple exigencia: democrática, social y ecológica.

La exigencia democrática es simple de formular: cada país o conjunto de países tiene vocación para definir, por sí mismo, su tipo de sociedad —que no son necesariamente idénticas— y no dejar que le sean impuestas por medio del arma del comercio internacional. Es necesario adecuar al máximo el perímetro de intervención de las ciudades y el de los flujos económicos y financieros, para que una regulación eficaz pueda efectuarse. El contra-argumento de los liberales es bien conocido: como todos los regímenes estarían funcionando con el modelo del Estado de Derecho, la mano invisible del mercado serviría mejor a las libertades que los gobiernos autocráticos.

Más allá del hecho de que los pueblos no están condenados eternamente a soportar las tiranías, la complicidad nunca desmentida entre las finanzas y las dictaduras, retira cualquier creatividad de tales discursos. La experiencia lleva a pensar lo contrario y es que los financistas aprecian particularmente los gobiernos “enérgicos”, que saben reprimir y encarcelar opositores y sindicalistas, y que le dan un clima de “confianza” a los inversionistas. El acuerdo entre Pekín y Washington —mañana será con Bruselas— para la entrada de China en la OMC muestra el poco caso que se hace a los derechos humanos cuando está en juego la única cosa que cuenta: el negocio.

Las espirales de Todd

Emmanuel Todd nos muestra

que en términos de rendimiento, el libre comercio, a través de la fusión de las naciones en un sólo mercado, lleva a una espiral descendente, los factores de producción abundante —la mano de obra poco cualificada— y los factores de producción escasos —capital y mano de obra muy calificada— a una espiral ascendente.

Se produce así el aumento de las desigualdades en los países desarrollados, más aún, se introduce en ellos las desigualdades mundiales. El autor subraya que, separando geográfica, cultural y psicológicamente la oferta de la demanda, el libre comercio crea un universo económico en el que el empresario no tiene más el sentimiento de contribuir, a través de los salarios que paga, a la formación de una demanda global en escala nacional⁶. Este desemparejamiento destruye las solidaridades y las responsabilidades, así como

6. Emmanuel Todd, *L'illusion économique*, Gallimard, París, 1998.

los fundamentos de la ciudadanía. Los reencuentros entre la empresa y el territorio también son una condición de la democracia.

No sorprende que el comercio electrónico al impulsar la extrema desconexión espacial entre el productor, el vendedor y el comprador, beneficia a los liberales —que ven allí la expresión del mercado perfecto, pero hasta hoy sólo presente apenas en los manuales de economía—, así como a la de los cyberbeakniks que, fascinados por la red y el teclado, olvidan que un libro o una olla no cambian de naturaleza, si los encomendamos *on line*, o si los compramos en una librería o en un supermercado. Las consecuencias físicas de ese comercio pueden llegar a ser considerables, si las previsiones de la OCDE —o sea, un volumen de un trillón de dólares en el

2003, un sexto de los intercambios anuales mundiales actuales— llegaran a ser reales.⁷

Los bienes transmisibles por la vía electrónica —libros, discos, películas, programas de computadora, etc.— son reconstituídos en el punto de llegada, escapan, con efecto, a impuestos como el ICMS, y contribuyen a la pauperización de los Estados, y por esta vía a los servicios públicos. Las consecuencias sociales no son menos graves: al ser la finalidad del comercio de los sectores citados, los infelices subsistirán sometidos al pago de los impuestos. El comercio electrónico, si no es objeto de una reglamentación estricta, se va a transformar en la máquina de guerra contra lo que resta de cohesión social. El tono en este tema lo puso el presidente Clinton cuando firmó, en octubre de 1998, una ley

7. Antonie Reverchon, “*L’explosion du commerce électronique, un défi aux systèmes fiscaux*”, Le Monde, 14/12/1999.

que establecía una moratoria de tres años para la transacción de ventas por Internet.

Electrónico o no, el comercio de bienes materiales implica siempre una vía en dirección al comprador final. Cuando mayor es la distancia entre su domicilio y el local de producción, son necesarios más medios de transporte, más consumo de energía, en general no renovable, y se emite más gas carbónico agravando el efecto invernadero. El navío hundido *Érika* constituye, en ese sentido, un caso ejemplar y, por una vez, estaremos de acuerdo con Claude Imbert, editorialista del *Point*, cuando escribe: “La proliferación del transporte marítimo es apenas una metamorfosis, entre muchas otras, de la mundialización de los intercambios.” Pero no lo seguiremos cuando continúa: “Es inútil, ahí como en cualquier otro caso,

diabolizarla: es incontenible”⁸.

El transporte no es el único factor que contribuye a la degradación del medio ambiente por la “proliferación” —la palabra es exacta— de un comercio que transfiere los costos ecológicos al conjunto de la sociedad, en lugar de incluirlos en los precios. Los inversionistas aprecian los países donde se puede saquear impunemente la flora, las aguas, los suelos, y donde las legislaciones ambientales son displicentes, o no son aplicadas. Al fin, ¿no se trata en este caso, de una “ventaja comparativa” como cualquier otra, susceptible de atraer capitales en dirección a los países pobres? Este discurso cínico no es sólo hecho por los capitalistas predadores y sus portavoces, sino también por algunos gobernantes de países “emergentes”, cuya firmeza con relación a las multinacionales y su determinación para resistir a to-

8. *Le Point*, 31/12/1999.

das las tentativas están, evidentemente, por encima de cualquier sospecha... La idea de introducir cláusulas ecológicas en los acuerdos comerciales y la negativa para permitir que los intercambios tomen el medio ambiente como rehén no les convendría. Pero eso no es una razón para renunciar a ello.

Las cláusulas sociales y ambientales

La aplicación de cláusulas ecológicas tiene como base la misma lógica de las cláusulas sociales: se trata de utilizar el veto del comercio, el único que tiene seriedad en un Estado —y que permanecen impasibles frente a las eventuales observaciones o condenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o de la Sub-Comisión de los Derechos Humanos de la ONU—. Como en el judo, se debe utilizar la propia fuerza del comercio para que

desempeñe un papel exactamente inverso de lo que fue hasta ahora el suyo.

En vez de contribuir a la destrucción del medio ambiente, la desanima con medidas disuasivas. En lugar de dirigir los ojos sobre el trabajo de los niños y de los presos, sobre la prohibición de la sindicalización, sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, etc., ella neutraliza las “ventajas comparativas”.

Fue la mención a las cláusulas sociales hecha por el presidente Clinton, al llegar a Seattle, la que incendió las mentes de ciertas delegaciones del Sur. El frente de la oposición es enorme, agrupando socios inabituables. Se encuentran ahí gobiernos y patronos de numerosos países del Sur, especialmente de China y de la India; la totalidad de los dirigentes de las multinacionales, como por ejemplo Robert J. Eaton, copresidente de la Daimler-

Chrysler, que respondió a Clinton: “Imposible!! No se pueden tomar las condiciones de trabajo y de empleo de una país e imponerlas a otro”⁹; el Financial Times: “Los objetivos sociales entrarían frecuentemente en conflicto con los objetivos del libre comercio,”¹⁰ afirmación que al menos es sincera; cerca de tres cuartos de los dirigentes de las empresas de Asia Oriental¹¹; e intelectuales del Sur, se adhieren al programa de Jagdish Bhagwati, profesor de economía en la Universidad de Columbia y personalidad omnipresente en la comunidad anglosajona, donde desempeña el papel de tercermundista de servicio a favor del libre comercio. Pero este saco aún lo componen sindicalistas del Sur, así como investigadores y diri-

gentes de asociaciones del Norte, como por ejemplo el periodista y economista Denis Horman¹².

¿El hecho de que la Unión Europea y el presidente Clinton —para atraer la buena voluntad de los sindicatos— se tengan que pronunciar a favor de tales cláusulas, y de que ciertos sindicalistas del Sur lo hagan en contra, es suficiente para desacreditarlas? Eso sería absurdo. Toda la cuestión reside en saber cuáles serían los criterios en contra, el tipo de medidas a tomar y las instituciones que las aplicarían. Tal como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo hace para el desarrollo humano, la OIT podría elaborar los indicadores apropiados para el respeto a las convenciones que la mayoría de sus miembros

9. Business Week, 20/12/1999.

10. Financial Times, 27/11/1999.

11. Investigación publicada por Far Eastern Economic Review, 23/12/1999.

12. Denis Horman, “Clause sociale et résistance sociale”, Imprecor, Bruselas, diciembre 1999.

asignarían, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUM), con relación al grado de protección del medio natural. En este último caso, sería necesario utilizar los trabajos de los economistas que no se satisfacen con el chocante principio de “polucionador-pagador” y que integran en los precios la totalidad de los costos, especialmente los del transporte, groseramente subvalorados. Es, con efecto, urgente reducir la circulación de aviones, camiones y navíos transportando la carga, que es justamente lo contrario de lo que pasa: en Francia el tráfico hecho por camiones en las autopistas aumentó en 6% en 1999.

Cuando las medidas a tomar a partir de esos criterios —que podrían igualmente servir a otros fines, como, por ejemplo la limitación de

las inversiones directas en el exterior, tal como lo propone en sus columnas el profesor Howard M. Wachtel¹³— se presentan frecuentemente sobre su forma punitiva, se alimenta la acusación de “proteccionismo”. Tal acusación perdería mucho de su pertinencia en un sistema comercial mundial menos hipertrofiado, en el cual serían privilegiadas las dimensiones nacional y regional de los intercambios.

Sin ventajas para explotar

Hace algunos años, Maurice Lauré, crítico de la TVA¹⁴, hizo las propuestas, retomadas especialmente por Pierre-Noël Giraud, profesor de la Escuela de Minas de París, de un proteccionismo “altruista”, que permita al mismo tiempo proteger

13. Howard M. Wachtel, “Trois taxes globales pour maîtriser la spéculation”, *Le Monde Diplomatique*, octubre 1998.

14. Tributo sobre el Valor Agregado francés, equivalente a nuestros ICMS.

los modelos sociales más avanzados —son por tanto los más amenazados por la globalización liberal— y los intereses de los trabajadores del Sur¹⁵. Se trataría de introducir un nuevo sistema de tributación, a través de la aplicación de una combinación de indicadores de la OIT y del PNUM, así como eventualmente los del PNUD, y de transferir las cuantías así obtenidas al país de origen; conforme a las condiciones estrictas de utilización para fines sociales, ambientales o educacionales, sea a organizaciones internacionales y/o regionales que los utilizarían en el país respectivo según las mismas condiciones.

Esos tributos serían variables conforme a los países, o conjunto de países, en función de sus “notas”

respectivas fijadas por sus indicadores, regularmente actualizados para tener en cuenta los progresos y retrocesos en las legislaciones y prácticas sociales. De esta forma, entre dos países o mercados comunes con las mismas notas, buenas o ruinosas, las tributaciones serían nulas. Entre la Unión Europea y China ellas serían sin duda elevadas. Este sistema de tributación —que hasta la conclusión de la Ronda de Uruguay era uno de los fundamentos de la Política Agrícola Común europea, establecida en 1962— sustituiría la de las tarifas y el conjunto de las reglas de la OMC, especialmente la “cláusula del tratamiento nacional”, esto es, prohibición de dar preferencia a los productores nacionales, debiendo

15. Maurice Lauré, “*Rapport sur le chômage*”, La Jaune et la Rouge, octubre 1994, citado por Bernard Cassen, “*La clause sociale, un moyen de mondialiser la justice*”, Le Monde Diplomatique, febrero 1996; Pierre-Noël Giraud, L’Inégalité du monde, coll. “*Folio*”, Gallmard, París, 1996; Economie, le grand satan, coll. “*Conversations pour demain*”, Textuel, París, 1998.

los extranjeros ser tratados de la misma manera; y la “cláusula de la nación más favorable”, por la cual es prohibido discriminar países que no respetan el medio ambiente o los derechos sociales de los trabajadores. Neutro y transparente, ese sistema armonizaría las condiciones de acceso a los mercados y suprimiría la exportación de mano de obra que marca diferencias impresionantes en las condiciones de trabajo y de remuneración entre países.

Podría objetarse que es complicado de elaborar y aplicar. Sin duda, se podría, pero igual de complicadas son las múltiples tarifas actuales. Más allá de esto, este trabajo ocuparía a los funcionarios de la OCDE y de OMC de manera más útil. Las instituciones adecuadas para gobernar tal sistema deberán ser imagina-

das, tal como las necesarias para la gestión y aplicación del Tributo Tobin. Pero estamos delante de un laboratorio de discusiones internacionales, más estimulantes para todos, en particular para los sindicatos y los movimientos de ciudadanos, que las que actualmente se dan entre las organizaciones internacionales. La aplicación mecánica de estos criterios cuantitativos de tributación debería ser complementada por las preferencias fiscales concebidas con las iniciativas cualitativas, tales como las diversas formas de comercio justo, dotadas del sello internacional Max Havelart, que favorecen las conexiones directas entre productores, en primer lugar del Sur, y consumidores, sobre todo del Norte.¹⁶

El reembolso del monto de las

16. Para saber más sobre el comercio equitativo, sus principios, sus actores y su volumen, leer el *Anuário 98/99*, Plateforme pour le commerce équitable, *Aspal, Moutiers-sur-Bohême*.

tributaciones constituiría un poderoso estímulo para el perfeccionamiento de las normas sociales y ambientales, contrariamente a lo que pasa con la Política Agrícola Común europea (PAC) y los países de origen de los productos. Es que ya no sería “ventajoso” tratar de tumbar esas normas. Tendría aún una cualidad mayor; por la liquidez que inyectaría, reformaría el mercado internacional de los países en los cuales los programas de ajuste estructural obligarían a exportar exageradamente. Más allá de eso, haría que se volviesen hacia formas de desarro-

llo más autocentradas, por lo tanto, más democráticamente controladas. La moratoria de sus deudas externas, en proporciones que nada tienen que ver con los simulacros actuales, sería un compañero indispensable de esta mutación de nivel. Pues es preciso oponer a un modelo unilateral que “hace el sistema”, otro sistema igualmente coherente. Su ejecución no está aún en nuestras manos, sino en las fuerzas de las cuales Seattle vio apenas una pequeña parte que es ahora posible trabajar juntas.

Una revolución tranquila del trabajo

La idea del derecho a una renta básica independiente del trabajo fue propuesta por Thomas Paine, diputado durante la Revolución Francesa.

Él afirmaba que la apropiación de la tierra por algunos justificaba la concesión a los otros de medios de subsistencia.

Chantal Euzéby

El desastre del desempleo estructural, como la multiplicación de los empleos precarios, el agravamiento de las desigualdades y la inestabilidad creciente de las familias, amenaza la propia cohesión de la sociedad. Cuestiona los sistemas de protección social contruidos para el pleno empleo, el trabajo en tiempo integral y la familia estable.

Para enfrentar estos desafíos, los liberales avanzan en el principio de “Nada de derechos sin obligación al trabajo” y pretenden limitar la protección social a las personas más necesitadas. En el otro polo se encuentran los partidarios de una renta mínima sin precondiciones, para todos¹, llamada de “renta de existencia” por Yoland Bresson y René

-
1. Para una presentación de las diversas concepciones sobre la renta de existencia, leer, principalmente, “Vers un revenu minimum incondicinnel?”, de la *Revue du Mauss*, N° 7, 1° semestre de 1996; el número especial “Pour ou contre le revenu minimum?”, de *Futuribles*, N° 184, febrero de 1994; Chantal Euzéby, *Le Revenu minimum garanti*, ed. La Découverte, coll. “Repères”, Paris, 1991. La revista *Transversales Sciences Cultures* también publicó numerosos estudios sobre el asunto.

Passet, de “abono universal”, por Philippe Van Parijs, y de “renta-ciudadana”, por Jean-Marc Ferry. Esta renta sería atribuida a cualquier individuo desde su nacimiento, sin ninguna precondition de estatus familiar o profesional, según el principio de que todos tienen derecho a un mínimo de recursos por el hecho de existir, y no para existir.

Una tercera posición es esbozada por los firmantes del Llamado Europeo por una Ciudadanía y una Economía Plurales (AECEP), principalmente como la proposición, hecha por Alain Caillé, de una segunda renta mínima de inserción (RMI, en Francia), “con precondiciones mínimas”², o la idea, expuesta más adelante, de un tríptico de derechos mínimos desvinculados del trabajo.

Renta mínima sin precondiciones

La idea del derecho a una renta básica independiente del trabajo fue propuesta en el fin del siglo XVIII por Thomas Paine, periodista y panfletario norteamericano que se tornó ciudadano francés y diputado de la Convención³. El consideraba que la apropiación de la tierra por algunos justificaba la concesión a los otros de medios de subsistencia. Desde entonces esa idea fue retomada principalmente por Jacques Duboin, en los años 30, en Francia, y por el Círculo Charles Fourier, en el inicio de los años 80, en Bélgica. Hoy ella es defendida por la corriente de los “distributivistas”, en la estela de Jacques Duboin⁴, por la Asociación para la Instauración de la

2. Leer, de Alain Caillé, en: *Vers une économie plurielle*, de Guy Aznar, Alain Caillé, Jean-Louis Laville, Jacques Robin y Roger Sue, ed. Syros, París, 1997.
3. Asamblea Legislativa que funcionó en el período revolucionario francés, de septiembre de 1792 a octubre de 1795 (N.T.).
4. Las tesis de la economía distributiva, de Jacques Duboin, continúan siendo debatidas en la revista mensual *La Grande Relève* (BP 108, 75115, Le Vésinet Cedex)

Renta de Existencia (AIRE)⁵, afiliada a la red europea del *Basic Income European network* (BIEN), así como por partidos o grupos diversos en varios países.

Es el caso, principalmente, de los Verdes en Alemania, en Holanda y, más recientemente, en España, donde los militantes de las provincias de Castela y de Leão redirigieron, en 1997, una propuesta de ley contra la exclusión social, incorporando una "renta ciudadana". En Irlanda, la Comisión para la justicia, de la Conferencia Episcopal (CORI), acaba también de difundir un documento, *Surfing the Income Net*, proponiendo una renta mínima sin precondiciones para todo el mundo⁶.

Los partidarios de esta fórmula consideran que la capacidad productiva de una sociedad es el resul-

tado de todo el saber científico y técnico acumulado por las generaciones pasadas. De esta forma, los frutos de ese patrimonio común deben servir de provecho al conjunto de los individuos, sobre la forma de una renta sin precondiciones. Esta renta se sobrepondría a otras ganancias de actividad y substituiría, parcial o totalmente, conforme a los autores, las ayudas sociales que benefician a las casas: mínimo social (entre ellos el RMI), otras prestaciones de ayuda social, auxilio a las familias, becas de estudios, subvenciones a los agricultores, etc.

Menos oferta de mano de obra

La renta de existencia ofrecería tres tipos de ventajas. En el plano de la eficiencia redistributiva, tornaría

5. AIRE publica un boletín de ligazón trimestal (Mme Bernard, 33, avenue des Fauvettes, 91440 Bures-sur-Yvette).

6. Se puede encontrar la traducción de este documento en el Bulletin de liaison n° 17, invierno de 1998, de la asociación AIRE.

el sistema social más simple, menos costoso para gobernar, menos estigmatizante para las personas que reciben auxilios —por la supresión de los controles de los recursos— y más eficaz para luchar contra la pobreza absoluta. La formula sería, por otro lado, más adaptada a la inestabilidad familiar, ya que se trataría de un derecho propio, ligado a la persona, y no a la familia fiscal como en los casos de impuesto negativo o del RMI.

En cuanto al mercado de trabajo, en la medida en que esa renta dé a los individuos la posibilidad de no trabajar, de trabajar menos o de retirarse temporal o permanentemente de sus empleos, reduciría la oferta de mano de obra y tornaría las actividades remuneradas intermitentes más seductoras, tanto para las casas como para las empresas. A partir de la garantía ofrecida, los desempleados y los asalariados que desearan cambiar de profesión es-

tarían más propensos a establecerse por cuenta propia, y hasta emplear a alguien.

Responsabilidades familiares y domésticas

Cada uno podría aprovechar para formarse, o reciclarse, para tener una licencia de un día por semana a fin de experimentar otras actividades profesionales, o para cuidar de sus hijos o de sus parientes viejos o enfermos, lo que economizaría prestaciones y servicios sociales. El Estado podría igualmente utilizar este abono como instrumento de compensación salarial en el establecimiento del sistema de reducción de la jornada de trabajo. En fin, como escribe André Gorz, este abono universal sería “la mejor alabanza para la redistribución, lo más ampliamente posible, tanto para el trabajo remunerado, como

para las actividades no remuneradas”⁷.

Si nos colocamos en el punto de vista de la sociedad y de su organización, la renta de existencia cambiaría los comportamientos y los valores. Los servicios de utilidad social y las actividades culturales, deportivas y de interés público, así valorizadas, podrían desarrollarse sobre diversas formas: trabajo voluntario, autosuministro de servicios, asistencia a personas enfermas o dependientes, apoyo escolar a los niños con dificultades, cuidados con el medio ambiente, etc. La división de responsabilidades familiares y domésticas en la familia podría ser más equilibrada. Dejando el empleo de ser el único factor de integración, estaría abierto el camino para una sociedad de actividad plena, o de multiactividad.

Las restricciones de la moneda única

Las principales críticas e interrogaciones surgen respecto al nivel de la renta a ser ofrecida. Si fuera baja, con la finalidad de limitar el costo financiero, los efectos positivos esperados podrían no ser importantes. Las personas poco o no cualificadas serían obligadas a aceptar empleos desvalorizados, o contentarse con un pequeño abono. De ahí los riesgos de la dualización de la sociedad —persistentes o agravados— habitualmente citados por los críticos de la renta universal. Por otro lado, si para posibilitar verdaderas elecciones su monto fuera suficientemente alto —los correspondientes a SMIC⁸— ese dispositivo incitaría a abandonar el trabajo, el que tomaría su costo adicional prohibitivo y detendría la innovación y el dinamis-

7. Leer, de André Gorz, *Misères du présent, richesse du possible*, ed. Galilée, París, 1997.

8. Salario mínimo francés (N.T.).

mo económico.

Los montos actualmente propuestos se sitúan entre 200 y 300 dólares por persona al mes, a veces con una diferenciación conforme a la idea. El costo líquido a ser financiado, después de la aplicación de los repartos sociales y de la avaluación de las economías realizadas, sería del orden de 35 billones de dólares por año, según Yoland Bresson, a partir de un desdoblamiento a cinco años para la concreción del sistema y el recurso al empréstito⁹. Ese costo sería un poco mayor, en la avaluación de René Passet¹⁰, o el mismo en la nuestra: de 40 a 45 billones de dólares, o sea, cerca del 4.5% del Producto Interno Bruto de Francia. Son cuantías que nada tienen de exorbitantes, pero

que parecen entretanto difíciles de ser obtenidas si los políticos se someten a las restricciones de la moneda única, o euro.

Renta mínima de inserción

Otro argumento frecuentemente invocado: el carácter injusto de la ausencia de precondiciones. Pagar una renta básica a todos, inclusive a los mas ricos, es ilógico. Pero la progresividad del impuesto de renta, si fuese realmente aplicada, podría tener como efecto retornar a los privilegios de una gran parte o la totalidad de su abono. Por esto el verdadero problema es exactamente el de la reformulación de ese impuesto y el de su vínculo con otras recetas fiscales. En Francia, por

9. Leer, de Yoland Bresson, *Le Partage du temps et des revenus*, ed. Economica, París, 1994. Leer también su artículo "Instaurer un revenu d'existence contre l'exclusion", *Le Monde Diplomatique*, fevereiro de 1994.

10. Leer, de René Passet, "Sur les voies du portage", *Le Monde Diplomatique*, marzo de 1993.

ejemplo, la contribución social general (CSG), la tasa ecológica, el impuesto sobre las rentas financieras y sobre el capital, etc. Una reforma que los sucesivos gobiernos tienen considerado siempre mejor aplazar.

Es esa razón por la cual parece ser más realista y menos costoso comenzar por la reforma de la RMI e instaurar un tríptico de derechos mínimos universales. Alain Caillé propone una segunda RMI, sin contrato de inserción, automáticamente concedido a personas que no disponen del equivalente a medio salario mínimo y compatible plenamente con otras fuentes de renta, todas ellas sometidas a una definición sobre la renta total. Ahora su concesión no estaría vinculada a una iniciativa de procura del empleo. El estímulo para la recuperación de una actividad profesional sería mucho más eficaz que en el dispositivo actual (en el cual la acumulación es

autorizada hasta el límite de 750 horas de trabajo), ya que la prestación sería regresiva con relación a las rentas ganadas, como en el sistema de impuesto negativo.

Los desafíos de la reforma social

La “armadilla” de la asistencia, constatada en ciertas categorías de familias —caso de casas con dos niños, beneficiados de un RMI cuyo monto aumentó el de los abonos familiares, quedó próximo al del SMIC— sería en parte evitada. El costo para las finanzas públicas sería ciertamente superior al monto de los mínimos sociales actuales, pero bien inferior a los estimativos de la renta de existencia indicados arriba. El principal problema sería la ampliación del trabajo no legalizado, que se tornaría más atractivo, sobre todo para los que están en la frontera de la exclusión —y por tanto más difícil y costoso de controlar—.

El RMI, en su fórmula original, fue la última pieza que se insertó en un sistema concebido para la era industrial. Sobrevivió. Debe ahora adaptarse a la sociedad posindustrial y a la evolución de las costumbres, de la misma forma que otros mínimos (actuales y a ser creados). Es preciso restaurar la seguridad en una sociedad dominada por la inestabilidad, y por tanto redefinir los derechos sociales en función de nuevas necesidades —empleos transitorios, licencias semanales o de formación, teletrabajo, prurialidad, estatutos mixtos— y adaptar las modalidades de financiamiento de los abonos que de ahí resulten. Ahí están los verdaderos desafíos de la reforma de la protección social.

El contrato de inserción

El par asistencia-inserción, que tenía sentido en el momento de

creación del RMI —el crecimiento defectuoso pasó al 4% en los años 1998 y 1989 y su capacidad de emplear era aún bastante grande—, no lo tiene más en un contexto en que la oferta de empleos está muy limitada. Muchos contratos de inserción están desprovistos de contenido real y se ejercen como la finalidad de eternizar el pago del abono. Convendría eliminar el contrato de inserción, espaciar el control de los recursos, abrir el RMI a los jóvenes de 18 a 25 años (el que es recusado por el gobierno francés) e incorporar en él las modalidades de estímulo para retomar una actividad, como está previsto en el proyecto de ley contra la exclusión social presentado por Martine Aubry, ministra del Empleo y de la Solidaridad.

El contrato de inserción debería ser sustituido por el contrato de actividad, tal como es propuesto por la descripción de Boisson-

nar¹¹. Con una duración de un mínimo de cinco años, sería asignado entre un trabajador y una persona jurídica comprendiendo empresas, organismos públicos o asociaciones. Esto ofrecería la posibilidad de alterar o de combinar, durante cierto tiempo, diversos estatutos o actividades; empleo asalariado, transitorio, trabajo de utilidad social.

“Dando lugar” a los desempleados

Para el resto de la cobertura social es prioritario hacer adaptaciones. En primer lugar, la sustitución de los actuales derechos derivados (extensión de los derechos de seguridad a los que tienen derecho, conyuge inactivo y niños) por derechos propios. Se sabe que las familias monoparentales son siempre supervalorizadas en los dispositivos

de ayuda social, y que las separaciones se traducen en general como pérdida de cobertura médica de los conyuges inactivos (en Francia, al cabo de un año). Con las recomposiciones familiares, los casamientos sucesivos y la multiplicación de divorcios y de separaciones, la concesión de jubilaciones y de pensiones para los descendientes se tornó un verdadero quiebracabezas, tanto para las administraciones como para las propias personas involucradas. Sin hablar de los casos, aún más complejos, en que uno de los conyuges (o ex-conyuge) se casa con extranjeros. La sustitución por dineros propios, independientes del estatuto familiar es de la actividad profesional, para los tratamientos médicos y las pensiones por vejez, y ahora se necesitarían tanto por razones morales como por las econó-

11. Jean Boissonnat, “Le Travail dans vingt ans: le rapport de la commission présidée par Jean Boissonnat”, Commissariat général du Plan, Odile Jacob (en colaboración con Documentation Française), París, 1995.

micas. En materia de tratamientos, el proyecto de ley contra la exclusión, presentado por Martine Aubry, pretende efectivamente —y nos nos alegramos de ello— una cobertura universal para enfermedades (CMU).

En cuanto a las jubilaciones, e inspirándose en los modelos dinamarqués, noruego y filandés, implicaría un sistema de tres pilares: una pensión mínima prefijada para todas las regímenes de jubilación (primer pilar, eventualmente aumentada para las personas viejas dependientes), la cual se acrecentaría a los derechos adquiridos por la persona y su cónyuge en función del trabajo (segundo pilar, obligatorio), así como los acumulados en el marco de los regímenes facultativos (tercer pilar). Esta reestructuración de los regímenes de jubilación, que debería ser generalizada en toda la Unión Europea para facilitar la movilidad de los trabajadores activos, garanti-

zaría el mínimo de recursos para la vejez. Así, asegurados, los trabajadores ocupados aceptarían más fácilmente “dar lugar” a los desempleados, suspender su actividad profesional u ocupar empleos inestables o de tiempo parcial.

Primer paso para una sociedad civilizada

Segunda prioridad: la protección mínima de los trabajadores independientes, categoría que no está protegida contra los riesgos del desempleo, de accidentes de trabajo y de dolencias profesionales. Sus estatutos y sus condiciones de trabajo son actualmente tan frágiles como la de los asalariados. Concederles el derecho a la indemnización por desempleo, sobre una base prefijada y por una duración limitada (seis meses, por ejemplo), daría a ellos una especie de derecho al fracaso; esto sería al mismo tiempo justo y favo-

nable al empleo —los desempleados y asalariados precarios estarían así estimulados a establecerse por su cuenta o a emplear a otros—.

Con la reducción del tiempo de trabajo, esas diversas medidas contribuirían al reequilibrio necesario entre la solidaridad profesional y la solidaridad nacional. Este sería un

primer paso, entre otros igualmente indispensables (reforma del código de trabajo, renovación sindical, reestructuración de los diversos niveles de intervención pública), para caminar por una distribución de rentas y de empleos digna de una sociedad civilizada.

Empleo: ¿Pensar a corto o largo plazo?

¿Debemos permanecer fieles a los dogmas de los últimos 20 años, que desembocaron en una profunda fractura social y en daños terribles, tales como los de México y Rusia? ¿O es posible, por el contrario, proponer una visión de largo plazo, en la que se tengan en cuenta los intereses de los hombres y las mujeres del planeta y que ponga a su servicio las tecnologías?

René Passet

“Procurar las vías de una acción voluntarista”¹, es partir de aquello que es irreversible y medir la importancia de lo que cambia. Irreversible es el progreso técnico —la computadora existe, no será suprimida por decreto—, irreversibles igualmente son las consecuencias relacionadas con él: la información “en tiempo real” y en escala mundial, el primado de la relación, la transformación de los modos de regulación de los sistemas. Pero lo que no es irreversible es aquello que transcurre en la

ideología: el libre comercio desenfrenado, que desregula e invita a los hombres a una supuesta lógica dichosa del beneficio, cuando apenas es de la codicia. De todas las mutaciones que comporta lo inmaterial, es sin duda la emergencia de la relación y de la interdependencia, en todos los niveles, la más decisiva. La extensión de las consecuencias relacionadas con los males por venir en las iniciativas humanas —la biósfera para las generaciones futuras— pone en primer plano la cues-

1. Leer “Ces promesses des technologies de l’immatériel...” Le Monde Diplomatique, julio, 1997.

ción de la responsabilidad, —ética—, en el campo de la economía. El argumento según el cual la economía liberal sería neutra, objetiva y universal, por tanto la única científica, porque dejaría exprimir la naturaleza de las cosas, no se sostiene: o bien la libertad corresponde al *laisser-faire* integral, y es preciso ir hasta la ley de la selva; o bien ella se organiza, y el sistema resultante no era más “natural” que los otros.

Esta pretensión de la unicidad de un sistema y de un cuerpo de pensamiento no puede reposar sino sobre la mala fe, o sobre la ignorancia de la más elemental actitud científica. Gobernar es decidir, y toda decisión supone sólo un sistema de valores. Se deduce de ello que la preeminencia de lo político se apoya en un proyecto social: la política, de hecho, es la resultante de la elección de los ciudadanos a unos intereses comunes; la economía supone solamente los medios. La inseguri-

dad que crea el mercado precisa de la intervención del Estado. El mercado tiene por objeto satisfacer la demanda solvente, no las necesidades; no debe suprimir la totalidad de la lógica social. No se puede juzgar con el mismo criterio de rentabilidad el suceso de una actividad privada y el de una institución pública, pues un servicio público tiene en por misión llenar las lagunas de las iniciativas individuales y corregir las deficiencias en los costos sociales de esa iniciativa. Su objetivo es compensar las desigualdades naturales, no consagrarlas y compensar las desigualdades naturales, no consagrarlas y reforzarlas. El lucro no puede ser el criterio universal, como algunos lo pretenden: ¿qué sería, por ejemplo, de las ferrovías si su desarrollo debiese hacerse solamente al ritmo de su rentabilidad inmediata, y qué sería, igualmente, del crecimiento del producto nacional?

La independencia de los bancos centrales —haciendo primar la lógica parcial del instrumento sobre la de la colectividad— se ajusta a la pura aberración. Es así como este doble reduccionismo, que va de lo político a lo económico y de lo económico a lo monetario, quiere consagrar a Europa al monetarismo. La economía, así como la nación, no se reducen a la lógica de alguno de sus componentes. Estas lógicas, a un tiempo complementarias, conflictivas, irreductibles e indisolubles, necesitan del arbitraje del poder público, expresión organizada de la voluntad popular, que la habilita para ejercerlo.

Es particularmente importante en estos tiempos de cambio que el presente debe ser interpretado en la perspectiva de largo plazo. No se administra de la misma manera el corto plazo, sino de acuerdo con la perspectiva histórica en que se inscribe. Se obstinan en confundir co-

yuntura y crecimiento, y que de este último resultará el pleno empleo. Contención económica o recuperación. Tal es el debate. Los argumentos invocados —deflación competitiva, equilibrio de las cuentas, costos de las empresas, de un lado; estímulo keynesiano de la demanda, por el otro— situándose todos en la perspectiva de una lógica que ignora los cambios del sistema.

Para los defensores de la contención, sólo cuentan los equilibrios contables que se obtienen a fuerza de reducir la demanda y aumentar las obligaciones de los más desfavorecidos. La flexibilidad de los impuestos constituye el medio de sobrevivencia y la protección de los otros. Los hechos demuestran que no basta fortalecer las capacidades de respuesta del aparato productivo para poder hacer el equilibrio cuando la demanda permanece inerte.

Los partidarios de la recuperación aprenderán, a la luz de la expe-

riencia, que el marco nacional para el que fue concebida la teoría keynesiana, no es tan determinante. En ese contexto globalizador, los requerimientos franceses de Jacques Chirac (1974-1976) y Pierre Mauroy (1981-1984) difundieron sus efectos benéficos... sin embargo crearon un déficit tenaz de la balanza exterior francesa. Ahora se debe tener un cuidado extremo ahora para evaluar cuidadosamente las condiciones nacionales. Pero se obstinan en confundir la recuperación coyuntural de corto plazo con un crecimiento duradero, y en creer que este último establecerá el pleno empleo. Por un un monumental error del método, creen que proyectar sobre el largo plazo una constatación válida sólo para el corto plazo, los conduciría a que fijando una tasa de aumento del producto interno bruto (PIB) nos llevaría a la desaceleración del desempleo. Si, de hecho, una aceleración de la tasa

de crecimiento del PIB lleva, muy frecuentemente, con efectos inmediatos, a la estabilización o a la regresión del desempleo, sólo es válido para un momento determinado, y para un Estado que desarrolle una evolución tecnológica en la organización del sistema productivo y de la población. Esto es, cuando son inmovilizados los propios motores del crecimiento, fenómeno esencialmente de largo plazo.

Para el corto plazo, todos los otros factores, si se consideran en el mismo saco, el volumen del empleo tendería a variar en el mismo sentido de la producción. Pero, en el largo plazo, el crecimiento del producto nacional y el desempleo evolucionan en el mismo sentido: en Francia, desde 1970, cuando el producto nacional era multiplicado por tres, el desempleo lo era por cinco. Lo que aquí es determinante —y es tal vez esta cuestión crucial la que se pretende esconder—, no es lo “más”

o lo “menos” del crecimiento, sino el modelo de crecimiento y de organización social.

De hecho, contención económica o recuperación no son problemas teológicos que se regulan para la eternidad, sino cuestiones cuya respuesta esta relacionada a una perspectiva histórica. Hay fases en que las rupturas tecnológicas demandan profundas transformaciones del aparato productivo. La prioridad ahora es creer que la renovación del capital garantizaría los desarrollos futuros. Así, en el comercio del siglo XIX, el gran economista clásico inglés David Ricardo puede legítimamente presentar el capital como el motor de todo crecimiento, y el ahorro como una virtud. Pero llega también el momento en que, lo mismo

que las tecnologías continúan progresando, la cuestión se revierte y se debe tomar otra vía: a la de plena utilización de los potenciales puestos en acción. Los vectores de desarrollo se trocan yendo del capital hacia la demanda. Fue lo que en 1936 comprendió Keynes², cuando preconizó una política de grandes trabajos y de distribución del poder de compra, mantenida, especialmente, con el déficit presupuestario. El ahorro entonces se torna vicio y el consumo, virtud.

Parece que actualmente estamos en una de esas fases³. Estabilidad de precios, negocios externos, excedentes, inercia de la demanda, alta capacidad de inversión —que, en vez de convertirse en capital productivo, es reorientado al capital fi-

2. Leer Michel Beaud, “Keynes, où l’esprit de responsabilité” *Le Monde Diplomatique*, diciembre de 1996.

3. Los primeros indicios anunciadores de esta situación podrían ser percibidos desde el fin del año de 1992. Leer “Ne pas se tromper de relance”. *Le Monde Diplomatique*, diciembre de 1992

nanciero— todo está a favor de la recuperación. Es pues el momento de oponerse a los criterios de Maastricht: Es preciso estimular el consumo de los particulares, aumentar los gastos públicos productivos en los sectores de futuro —un buen ejemplo es el proyecto de grandes redes transeuropeas de transporte, formalmente aceptados por los quince miembros de la Unión Europea, pero jamás financiado—. Conviene también disminuir la presión de los intereses, simplificar los trámites administrativos, responsables de muchos fracasos e innumerables negativas de empresas. Es así como estas recetas inmovilizan el sistema. El estímulo a la actividad —tanto del lado de la oferta como de la demanda— pueden reactivarlo.

Entretanto, ninguna gestión coyuntural podría convertirse, sola, en estrategia de cambio. Si la globalización está dada de hecho, no pasa lo mismo con el libre comercio ni

con la desregulación, que son fruto de la ideología dominante, y no de la naturaleza de las cosas. Un acuerdo internacional —sólo así se deshace el poder de lo que ella es— se impone imperativamente. Es indispensable, en razón del desfase entre el nivel mundial, donde se manifiesta el poder económico-financiero privado, y el nivel nacional en el que se sitúan los poderes de control de los Estados. Es indispensable además, en la medida en que hay acciones necesarias que ninguna nación podría emprender sola, so pena de desencadenar distorsiones de competitividad en las que sería la primera víctima.

Es en conjunto que se podrían atacar los excesos de los mercados financieros sin provocar la fuga de capitales. Así, sería posible adoptar la obligación del depósito, antes que la especulación, de una fracción significativa de los excesos involucrados en los mercados; la limita-

ción de la capacidad de los agentes financieros de endeudarse con fines especulativos; el final del sigilo bancario... La "Tasa Tobin"⁴ sobre las transacciones financieras, de un monto preconizado de 0.1% al 0.5%, traería como efecto, según su autor, la oposición a los movimientos especulativos (comportando pequeños márgenes, sobre las masas considerables que se retornan sobre sí mismas), sin molestar a las operaciones comerciales que se efectúan en condiciones exactamente opuestas.

El premio nobel francés de economía Maurice Allais afirma que prohibir a los bancos especular por su propia cuenta suprimiría los grandes movimientos de desestabilización internacional⁵. La flexibilidad de las tasas de cambio, que produjo lo contrario a su promesa, de-

bería dar lugar a un sistema de paridades, al mismo tiempo fijas y revisables, cuyas tasas corresponderían al equilibrio de las balanzas comerciales. Así, serían reguladas al mismo tiempo la especulación sobre las divisas y los fenómenos de "dumping por el cambio".

Solo con políticas mundiales, es que se estaría en condiciones de poder oponer los efectos perversos de un libre comercio desigual a escala mundial. La libertad de los cambios sólo tiene sentido entre naciones con niveles de desarrollo comparables. Si no, se da libre curso a las distorsiones de la competencia por el *dumping* social y el *dumping* ecológico, y los efectos de dominación de las potencias sobre los más débiles. El argumento en verdad que defiende los grandes conjuntos

4. Leer Ibrahim Warde, "Le projet de taxe Tobin, bête noire des spéculateurs, cible des censeurs", *Le Monde Diplomatique*, febrero de 1997.

5. Maurice Allais, "Jacques Rueff et la politique économique", texto de un discurso pronunciado en homenaje al gran autor liberal.

internacionales homogéneos de libre cambio, protegidos en sus límites por la Unión Europea, reencontraría su estatuto perdido de “Comunidad”. El restablecimiento del principio de la “preferencia comunitaria” constituye pues una medida indispensable, sin la cual la construcción europea diluiría su régimen de libre negociación mundial en el que ella perderá todo el significado.

En este cuadro, los Estados Unidos hoy y las grandes potencias asiáticas mañana, encontrarían su contrapeso: la protección contra los diferentes *dumpings* se tornaría en el instrumento de ayuda al desarrollo de las zonas desfavorecidas. Según una proposición formulada pro Maurice Lauré⁶, los derechos de compensación que asignarían sus productos serían revertidos, por

ejemplo, a un fondo de desarrollo, alimentando una política de ayuda inspirada en el Plan Marshall. Sin duda, por definición, ninguna nación puede decidir sola sobre los acuerdos internacionales. Pero compete a cada uno colocar estas cuestiones en la escena pública, como Francia hace con la Europa Social, y la reafirma sin cesar.

Existe una relación histórica incontestable entre la reducción del tiempo de trabajo y el volumen del empleo. A primera vista, el progreso técnico crea trabajo. Así, de 1973 a 1994, el empleo total pasó, en Francia, de cerca de 21 millones de trabajadores a 22 millones⁷ y, en Alemania, de 26,65 millones a 28 millones. Pero, al mismo tiempo, el tiempo de trabajo medio provisto anualmente por individuo ocupado

6. Maurice Lauré, “Les délocalisations: enjeux et stratégies”, *Futuribles*, París, mayo de 1993.

7. El aumento del desempleo se refiere entonces al hecho de que este aumento permanece inferior a aquel de la población en edad de trabajar.

decreció, respectivamente, de 1900 horas a 1600 en Francia y de 1870 a 1589 en Alemania. De suerte que el número total de horas trabajadas en cada una de las dos naciones pasó de 40 a 35 billones en la primera, y de 50 a 44 billones en la segunda. Conservando los horarios de 1973, Francia tenía tres millones de desempleados o más en 1994, y Alemania cuatro millones.

Fue por tanto la reducción de la fuerza de trabajo lo que permitió crear empleos. Y es en esta vía, más que en la persecución de normas definitivamente ultrapasadas, donde conviene contratarse. De la ley de Robien al sistema de modulación de los gastos sociales en función de la duración del trabajo propuesta por Michel Rocard, o la división de los tiempos sugerida por el antiguo responsable por el Plan Michel Albert, pasando por el “segundo cheque”

de Guy Aznar o la semana de cuatro días de Pierre Larrousurou... las modalidades imaginables son numerosas y frecuentemente complementarias⁸.

Dos imperativos contradictorios deben ser conciliados: reducir los salarios en la proporción de la reducción del tiempo de trabajo y contrariar la recuperación. Pero aumentar el precio del costo de las empresas es imponerles la escogencia entre pérdidas de competitividad y esfuerzos de productividad igualmente perjudiciales al empleo. El poder público debe por tanto intervenir, no con una legislación vertical e irrespetuosa de la diversidad de situaciones, sino incitando la participación financiera. Que los márgenes de maniobra que tiene, no sobrecarguen los gastos de la nación, en el re-desbordamiento de los gastos sociales (solución preconizado

8. Leer Christine Afriat, “Différents dispositifs de réduction du temps de travail en Europe”, *Transversales science/culture*, París, N° 39, mayo-junio de 1996.

por Michel Rocard) y en la reactivación de las sumas actualmente aparecen muertas para el financiamiento de la inactividad de los hombres. Estas sumas son considerables: 25 billones de dólares en 1995, si se tiene en cuenta el monto de las pensiones anticipadas; 65 a 70 billones, si tenemos en cuenta el conjunto de las pérdidas indirectas en impuestos, cotizaciones sociales, etc.

Así se desarrollaría progresivamente una forma de renta no directamente ligada al trabajo realizado, primer germen de una “renta mínima social garantizada”. Con modalidades y fundamentos diferentes, la idea de tal renta permanece en todas

las corrientes de pensamiento. El esfuerzo contemporáneo para fortalecer los lazos de interdependencia, haciendo del producto nacional una especie de bien común, en cuya formación es imposible distinguir un factor particular, coloca progresivamente la cuestión de esta renta en el meollo de toda reflexión sobre el futuro de nuestras sociedades⁹. En la lógica de esta evolución, la renta garantizada —que prefigura el RMI— está sin duda llamada a generalizarse y sólo podría ejecutarse progresivamente, comenzando por los más desfavorecidos. Tal como profesiones vulnerables o aquellas funciones que, como la pequeña

9. Así lo habían previsto, desde los años 30 y después del segundo conflicto mundial, los precursores contemporáneos que son el federalista Alexandre Marc y el abundancista Jacques Duboin. El pensamiento de Duboin continua al alimentar el debate contemporáneo, principalmente a través de la revista que él funda en 1934, *La Grande Relève*. La red del Llamamiento Europeo por una Ciudadanía y una Economía Plurales (AECEP) se esfuerza en definir, en escala europea, modalidades de proyectos realizables referentes a la división del trabajo, el tercer sector y la renta social. Para obtener el texto de este llamamiento: AECEP, 21, bd de Grenelle, 75015 París.

agricultura regional, cumplen con el mantenimiento del medio natural.

Esta progresividad limita el interés inmediato del debate sobre la universalidad de la renta garantizada. Ella contribuiría, incluso a la racionalidad del sistema. Evaluaciones anteriores muestran, que una buena parte de una renta universal sería compensada por la desaparición progresiva de parte de la protección social que tendría un doble componente empresarial, y la facción restante, representando aproximadamente el 4% del producto nacional, se llenaría por crecimiento de este último: Al ritmo anual moderado del 2%, aumentaría cerca del 50% en 20 años y, en los diez últimos años, en Francia, el PIB crecería hasta los 200 billones de dólares.

Pero ninguna iniciativa puede desarrollarse si no tiene un medio de propagación favorable. Este medio es en primer lugar el tejido social. Es preciso tener un raciocinio bien me-

diocre para querer que el desarrollo se active en medio de su degradación: si extinguimos el sistema de salud, la investigación, la educación, todos los servicios públicos no directamente rentables, tendremos la medida de cómo se deteriora la riqueza nacional y, sin duda también, la paz social. Es preciso ser una Margaret Thatcher para cuestionar la protección a los más desvalidos, bajo el pretexto de que su costo es mayor que la contribución que la sociedad recibe de ellos.

El medio de propagación también es la red de lazos de proximidad que, paradójicamente, la informática refuerza, al mismo tiempo que se extiende a escala planetaria. Las consideraciones locales relativas a las posibilidades de formación o de investigación, la existencia de un medio cultural, la cualidad de las infraempresas. De eso se derivan fuertes afectos que tornan socialmente productivas ciertas activida-

des situadas en el centro de lazos de relaciones: alfabetización, animación cultural en los barrios con problemas sociales, mantenimiento de las vías de comunicación y de los ecosistemas... Su censo debería ser efectuado sistemáticamente, y una contribución de la colectividad, justificada por su productividad social, permitiría conciliar su pobre rentabilidad directa con la exigencia de asegurar una vida decente para aquellos que lo asumen.

El medio de propagación, en fin, es el conjunto de las pequeñas y medianas empresas que irrigan el tejido económico. Ellas serían, en Francia, aproximadamente 2.3 millones, empleando los dos tercios de los salarios del sector primario y de los servicios financieros, la mitad de la producción y de las inversiones productivas¹⁰. Son muchas veces el

lugar de innovaciones importantes: fue el de la Intel, el microprocesador. Son, sobre todo, sitios de creación de empleos: de 1983 a 1993, los efectivos de las empresas de menos de 500 salarios crecieron el 13%, al mismo tiempo que las empresas de tamaño superior cayeron en un 30%.

Es preciso esperar que se diseñe la coherencia global de la política del gobierno de Lionel Jospin — cuyo proyecto de ley para la contratación de 350 mil jóvenes en los sectores público y asociativo constituye la primera parte— para juzgarla. ¿Sabremos identificar la ocasión del punto crítico donde todo puede oscilar? De un lado, el prolongamiento de las tendencias actuales, que desemboca en la destrucción del planeta, una sociedad definitivamente rota, donde la opu-

10. Jacques-Henri David, presidente del Banco del desarrollo de los PME, "Les PME, terreau de l'emploi de demain", *Le Monde*, 29 de mayo de 1997.

lencia de algunos reposa sobre la pauperización de la gran mayoría y, para completar, la explotación social. De otro lado, una sociedad donde, estando asegurada la cobertura de las necesidades fundamentales, cada uno podría consagrar mas o menos de su tiempo al trabajo y a la mejoría de sus rentas. Las actividades productivas, tienden a acabar de absorber la existencia, si se combinarán libremente, a lo largo de vida, como el ocio, la fami-

lia, la cultura, la participación en actividades ciudadanas¹¹.

Sueño eterno e ingenuo de un mundo entretanto al alcance de la mano? Nada dice que la fuerza de las ideas no terminará, al fin, por llevar ventaja sobre las potencias materiales. Cuando el dogma de una cierta economía, fundada en la lógica de estas potencias, entra en conflicto con las posibilidades humanas, no es el hombre el que es preciso cambiar, sino el dogma.

11. Leer Jacques Robin, "Repenser les activités humaines à l'échelle de la vie", *Le Monde Diplomatique*, marzo de 1997.



Por un Sindicalismo para la Democracia

Calle 51 No. 55-78 Tel: 513 31 00 Fax: 231 92 22
Casillero Electrónico: ens@colnodo.igc.apc.org
A.A. 12175 Medellín-Colombia